



Introducción  
a la  
Memoria Anual  
del Secretario General  
sobre la  
Labor de la Organización

---

16 de junio de 1965—15 de junio de 1966

**ASAMBLEA GENERAL**

DOCUMENTOS OFICIALES: VIGESIMO PRIMER PERIODO DE SESIONES  
SUPLEMENTO No. 1A (A/6301/Add.1)

**NACIONES UNIDAS**

Introducción  
a la  
Memoria Anual  
del Secretario General  
sobre la  
Labor de la Organización

---

16 de junio de 1965—15 de junio de 1966

**ASAMBLEA GENERAL**

DOCUMENTOS OFICIALES: VIGESIMO PRIMER PERIODO DE SESIONES  
SUPLEMENTO No. 1A (A/6301/Add.1)



**NACIONES UNIDAS**

*Nueva York, 1966*



# Introducción

## I. Observaciones generales

Este ha sido un año en el cual a todos quienes desean una mayor colaboración internacional en pro de la paz y el bienestar de la humanidad y trabajan por ella parecerá que las decepciones pesan más que los modestos progresos hechos en algunas direcciones.

La situación política internacional no ha mejorado. La nube que se cierne sobre el Viet-Nam se ha hecho mayor y más ominosa. El grave conflicto entre la India y Pakistán a propósito de Cachemira se ha calmado con ayuda de las Naciones Unidas, pero en otras zonas ha crecido la tirantez y ha estallado la violencia. Los armamentos, tanto nucleares como de tipo corriente, se han ido acumulando con gran rapidez. En comparación con ello, han ocurrido muy pocas cosas que ofrezcan perspectivas más brillantes a quienes ocupan las dos terceras partes del mundo en que la pobreza, la enfermedad, la ignorancia y la falta de oportunidad constituyen los hechos más salientes de la vida diaria. Las frustraciones han sido superiores a los cambios constructivos en el caso de problemas de larga duración como la situación en Sudáfrica, en el África Sudoccidental y en Rhodesia del Sur, y en el de controversias tan prolongadas como la de Chipre y la del Oriente Medio.

En tales circunstancias, si bien se pone muy de relieve lo necesarias que son las Naciones Unidas, se ve por otra parte que la Organización no puede actuar con toda la eficacia de que es capaz. Hablando en términos generales, y tal como ello se refleja en las actitudes adoptadas en las Naciones Unidas, las naciones poderosas no se han mostrado capaces, durante este período, de superar las suspicacias, los temores y las desconfianzas que surgen de sus diferentes ideologías y de sus diferentes maneras de concebir los mejores intereses del resto del mundo; ni las naciones ricas han conseguido sobreponerse al afán de que continúe su propia prosperidad; ni las naciones pobres han logrado compensar el peso muerto de su pobreza crónica y sus anacrónicas estructuras sociales.

Frente a esta situación la comunidad internacional, representada — y todavía lamento decirlo, incompletamente representada — por las Naciones Unidas, sólo ha conseguido, como en ocasiones anteriores, progresos limitados en aquellas esferas, como la del mantenimiento de la paz, el desarme, el desarrollo económico y social, la descolonización y los derechos humanos, en que más se espera de ellas. No puede haber dudas sobre lo honda y ampliamente que se abrigan estas esperanzas en todo el mundo; a decir verdad, nunca han sido más emocionantemente expresadas que como lo fueron por Su Santidad el Papa Paulo VI en su memorable alocución a la Asamblea General el 4 de octubre de 1965.

Dentro de la Organización, lamento verme obligado de nuevo a comunicar que, a pesar del acuerdo unánime

al que se llegó el año pasado, en el sentido de que las dificultades financieras se resolverían mediante la aportación de contribuciones voluntarias por los Estados Miembros, esas contribuciones no han llegado todavía en cantidad suficiente para enjugar el déficit del pasado, que sigue siendo importante. En cambio, la labor del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, establecido por la Asamblea General el pasado mes de diciembre, ha de contribuir, a mi juicio, a aliviar la preocupación y la incertidumbre que, en grado algo inquietante, mostraron muchos Estados Miembros en relación con algunos de los aspectos más amplios de nuestras finanzas. Para muchas de las dificultades fundamentales, especialmente las que nacen de diferencias constitucionales o políticas, el Comité Especial no ha podido sugerir soluciones prontas y fáciles. Ha resultado igualmente difícil el problema de armonizar las necesidades globales ilimitadas con los recursos comparativamente limitados que para satisfacerlas se pueden aportar colectivamente en las circunstancias actuales. Sin embargo, el Comité Especial consiguió un éxito singular en relación con algunos de sus objetivos más inmediatos: preparar un análisis claro y completo de la situación financiera de las Naciones Unidas con miras a un pronto restablecimiento de su solvencia, e idear medidas que permitieran un empleo más acertado de los fondos disponibles mediante una racionalización y mayor coordinación de las actividades de las Naciones Unidas y de las diversas organizaciones relacionadas con ellas. Confío en que el detenido análisis efectuado por el Comité Especial en su primer informe y el amplio margen de acuerdo alcanzado en cuanto al presente déficit financiero de la Organización constituirán una base aceptable para llegar a la liquidación de este déficit y al arreglo de anteriores deudas.

Creo asimismo que los Estados Miembros habrán tomado nota con satisfacción, como lo he hecho, del cuidadoso y positivo criterio adoptado por el Comité para su detenido estudio de los procedimientos de presupuesto, programación y coordinación del grupo de organizaciones internacionales. Frente a necesidades globales ilimitadas, la utilización más racional y eficaz posible de los recursos disponibles no es simplemente un objetivo deseable, sino también una necesidad práctica. Como es lógico, los propios Estados Miembros habrán de seguir asumiendo una gran medida de responsabilidad, ya que los programas y las prioridades reflejan esencialmente las decisiones tomadas por los distintos órganos legislativos nacionales. Pero al llevar a la práctica estas decisiones la Secretaría tiene un deber no menos importante, y está pronta para hacer su aportación en cualquier sentido y por cualesquiera medios que puedan convenirse después de examinar las muy valiosas propuestas que contiene el segundo informe del Comité Especial.

En la introducción a mi última memoria anual sobre la labor de la Organización expresé mi opinión de que era esencial, para el éxito de las operaciones de mantenimiento de la paz en el futuro, que contásemos para dirigirlas con normas y orientaciones básicas bien afianzadas. En esa oportunidad, así como posteriormente, expresé la esperanza de que el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz tuviese éxito en la elaboración y preparación de sus propias recomendaciones sobre esta urgente cuestión. El Comité Especial suspendió sus sesiones en la víspera de que se reanudara el decimonoveno período de sesiones de la Asamblea General con una nota optimista. Aunque no había podido encontrar ni siquiera una solución provisional para los problemas constitucionales y financieros abarcados en su mandato, consiguió, gracias a la cooperación y comprensión de que hicieron gala sus miembros, llegar a un consenso sobre la necesidad de robustecer a las Naciones Unidas mediante un esfuerzo común, sobre el funcionamiento normal de la Asamblea General y sobre la necesidad de resolver las dificultades financieras con que tropieza la Organización. Indudablemente, esto representó un notable progreso y fue motivo de aliento y esperanza, y fue seguido de un debate de fondo sobre el tema durante el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, en el curso del cual se expusieron varias ideas y propuestas concretas.

Por consiguiente, es para mí un motivo de pesar el hecho de que sea tan negativo el informe presentado por el Comité Especial a la Asamblea General. Dicho informe no sólo demuestra la continua imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre principios básicos, sino que, además, refleja una renuencia a abordar decisivamente el problema. Comprendo que esto puede deberse a la adversa situación internacional y, quizás, a circunstancias que escapan al control de la Organización, y no a falta de interés o preocupación por parte de los Estados Miembros. No obstante, espero que este problema, que está tan estrechamente vinculado a la función de la Organización en el mantenimiento de la paz internacional, no sea dejado a un lado y, por el contrario, reciba la atención que merece.

Llegado aquí, desearía referirme brevemente a la importante cuestión — que tradicionalmente ha sido un tanto controvertible — de informar a la opinión pública acerca de las Naciones Unidas. Se convendrá, creo, en que en definitiva la fuerza de la Organización y su capacidad de fomentar y alcanzar los objetivos para los que fue creada depende de la medida en que los pueblos del mundo comprendan y apoyen sus propósitos y sus actividades. En ese sentido, un programa de información pública bien meditado y universal es, en realidad, un programa de aplicación — contraparte esencial de las actividades básicas de la Organización. La Asamblea General reconoció y dejó formalmente sentado este hecho en 1946, en la sección II de su resolución 13 (I), en la que estableció normas y programas para las actividades de información de las Naciones Unidas. El hecho queda asimismo subrayado por el carácter esencialmente público de los debates de la Organización.

Creo, sin embargo, que también se convendrá en general en que si bien se ha hecho mucho en el curso de estos años para fomentar en todo el mundo un conocimiento y una comprensión públicos de los trabajos, los métodos y los objetivos de la Organización,

el éxito alcanzado no ha sido total o igualmente intenso en las distintas regiones del mundo. Tanto a la propia Organización como a los Estados Miembros les queda una inmensa tarea, no sólo para adaptar los programas y actividades de información a las distintas necesidades de hoy, sino también para explotar más eficaz y cabalmente las posibilidades que ofrece la reciente "explosión" tecnológica en los medios de comunicación con las masas. Se ha de tener también en cuenta que los Estados Miembros atribuyen cada vez más importancia a la difusión más amplia posible, en el mundo entero, de sus actividades en las Naciones Unidas. Necesidades nuevas y más amplias de información, sumadas a posibilidades y medios técnicos también nuevos y más amplios, requieren a mi juicio que se examine hasta qué punto son adecuados los métodos y recursos actuales de los Servicios de Información Pública de las Naciones Unidas para el cumplimiento de su labor. En la actualidad se está llevando a cabo ese estudio.

Es igualmente necesario y urgente — ya que la Asamblea General estimó que la responsabilidad primordial de fomentar la comprensión y el apoyo del público hacia los propósitos y actividades de la Organización recaía sobre los servicios nacionales de información, oficiales y no oficiales — que los Estados Miembros lleven también a cabo un nuevo examen y una nueva evaluación de la naturaleza y el alcance de sus propias actividades y programas de información dedicados al desempeño de esta tarea. Es en una estrecha colaboración entre los medios nacionales y unos Servicios de Información Pública fortalecidos y modernizados donde reside la posibilidad de difundir con eficacia por todos los rincones del globo la exposición del propósito y el esfuerzo colectivo que representan las Naciones Unidas, en un momento en que el éxito de la Organización ofrece la esperanza de romper por fin los antiquísimos ciclos de pobreza, ignorancia y contienda, y en que su fracaso entrañaría el peligro de un desastre total.

## II. Lentitud en la esfera del desarme

Por desgracia, en el pasado año se ha producido una inversión de la tendencia de los últimos años hacia algunos progresos en la estabilización y reducción de las fuerzas armadas y los presupuestos militares. Las hostilidades en el Viet-Nam, que están en proceso de escalación, y la situación internacional, que ha ido empeorando, han acelerado inevitablemente la carrera de armamentos, tanto de tipo corriente como nucleares, y, de modo no menos inevitable, han tenido un perjudicial efecto sobre las negociaciones encaminadas al desarme y, sobre todo, a un desarme general y completo.

Ha continuado la experimentación de armas nucleares, tanto en la atmósfera como bajo tierra. Dos países, Francia y la República Popular de China, que no son partes en el tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares, de agosto de 1963, por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua, han seguido realizando ensayos en la atmósfera, con el propósito evidente de conseguir, por lo menos, un armamento nuclear básico. Las tres principales Potencias nucleares, los Estados Unidos, el Reino Unido y la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que son partes en dicho tratado, han realizado ensayos subterráneos. Resulta difícil imaginar para esos ensayos subterráneos otra razón que la de estar destinados a producir armas nucleares más sofisticadas o, tal vez, a perfeccionar sistemas de cohetes contra proyectiles. Las posibles consecuencias son alarmantes. Si alguna de esas Potencias realizara un avance tecnológico unilateral en su potencial de armamentos nucleares ofensivo o defensivo, ello podría alterar el inestable equilibrio de terror existente y conducir a una nueva carrera de armamentos nucleares, mucho más acelerada.

En el pasado año se ha producido también — aunque, lamento decirlo, no con la misma intensidad — un aumento de los esfuerzos por limitar y controlar la carrera de armamentos nucleares. La Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones se ha reunido en Ginebra, en período de sesiones casi interrumpido, en un esfuerzo por cumplir las tareas que le había confiado la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones. El trabajo del Comité se ha concentrado principalmente en prevenir la proliferación de las armas nucleares y conseguir un tratado general de prohibición de los ensayos nucleares.

En cuanto a la cuestión de prevenir la proliferación de las armas nucleares, a la que se dio la más alta prioridad, el Comité de Dieciocho Naciones procuró llegar a un acuerdo sobre el texto de un tratado de no proliferación de las armas nucleares basado en los dos proyectos presentados, respectivamente, por los Estados Unidos y la Unión Soviética, teniendo en cuenta los principios establecidos en la resolución 2028 (XX) de la Asamblea General. Aunque sus esfuerzos no han tenido éxito aún, puede decirse, por lo menos, que se continúa buscando un tratado concertado. La posición de las partes se ha precisado y todas ellas se percatan de que habrán de hacerse concesiones si se quiere llegar a un acuerdo. Espero todavía, y he seguido pidiéndolo con insistencia, que los gobiernos interesados puedan alterar sus posiciones como sea necesario para que pueda concertarse un tratado de no proliferación, que entre en vigor lo antes posible.

Los peligros de la proliferación nuclear son muy reales y muy graves, mucho más de lo que, por lo general, se admite. La utilización de reactores nucleares produce plutonio, y éste, si se le somete a determinados procesos en una instalación de separación, puede utilizarse para fabricar armas nucleares mediante técnicas que hoy no son ya secretas. Según algunos cálculos, en 1980 los reactores de energía nuclear de todo el mundo producirán diariamente más de 100 kilogramos de plutonio. Es posible también que se descubran métodos más económicos y sencillos de producir materiales fisionables y que su disponibilidad con fines bélicos aumente de modo astronómico. El riesgo que hoy existe de una mayor difusión de las armas nucleares encierra un peligro tal para la humanidad que debieran establecerse salvaguardias internacionales no sólo sobre los reactores de energía nuclear, sino también sobre otras instalaciones nucleares que producen, utilizan o someten a procesos industriales cantidades importantes de materiales fisionables.

Puede que haya ya algunos países que, por equivocados que estén, tengan la esperanza — o se persuadan a sí mismos en su desesperación — de poder intentar un aumento de su seguridad procurándose armas nu-

cleares que sirvan para disuadir de cualquier ataque a un vecino hostil. Es posible que tales países estén poco dispuestos a renunciar a la posibilidad de conseguir esas armas, a menos que se encuentren otros medios de protección. Esos países pueden también sentirse reacios a renunciar al derecho de conseguir tales armas, a no ser que las actuales Potencias nucleares se comprometan — como dice la resolución 2028 (XX) — a “un equilibrio aceptable de responsabilidades y obligaciones mutuas”. Esas preocupaciones de los países no nucleares plantean problemas graves y difíciles, que deben afrontarse. La responsabilidad de resolverlos debe ser compartida por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y recae también sobre los Estados no representados en la Organización.

Un tratado general de prohibición de los ensayos nucleares, que incluya la prohibición de los ensayos bajo tierra, constituye, por sí solo, un importante objetivo. Disminuiría la velocidad de la carrera de armamentos nucleares y podría evitar una nueva carrera de cohetes contra proyectiles que, al modo de los incessantes avances que se realizan en este aterrador dominio, podría conducir al desarrollo competitivo de armas para contrarrestar esos cohetes contra proyectiles. Sería también un paso importante para prevenir una mayor proliferación de las armas nucleares. No obstante, aun entre los Miembros de las Naciones Unidas, el acuerdo sobre una prohibición de los ensayos nucleares bajo tierra se encuentra todavía en punto muerto, debido a la controversia surgida entre la Unión Soviética y los Estados Unidos sobre si los últimos progresos científicos en materia de instrumentos hacen posible detectar e identificar todos los ensayos subterráneos utilizando exclusivamente sistemas nacionales de detección. Se han hecho varias sugerencias de transacción. En algunas de ellas se propone un tratado “umbral” por el que se prohibirían todos los ensayos que sobrepasaran cierta magnitud sísmica. En otras se sugiere una moratoria para los ensayos subterráneos que se encontraran por debajo de ese “umbral” convenido y, al propio tiempo, un intercambio de información científica y técnica entre las Potencias nucleares y un descenso progresivo del umbral. Otra sugerencia que merece seria consideración es la de suspender todos los ensayos bajo tierra — con o sin tratado umbral — durante un período de prueba provisional, juntamente con un sistema de “verificación por reto”. En virtud de este sistema, se retaría a cualquier país sospechoso de haber realizado ensayos subterráneos a que demostrara su inocencia; tal país podría hacerlo de diversos modos, inclusive el de invitar a observadores extranjeros a que hicieran una inspección sobre el terreno. Esta idea de la verificación mediante el reto podría proporcionar un medio de facilitar los progresos no sólo en el control y verificación de los ensayos nucleares subterráneos, sino quizá también en otras medidas de desarme. Una sugerencia que ha encontrado cierta aceptación es la de establecer un “club de detección”, por medio del cual algunos países convendrían en perfeccionar sus sistemas de detección sísmica y cooperar en el intercambio de informaciones y datos obtenidos de esos sistemas. Varios gobiernos estudian actualmente formas y medios de llevar a la práctica esa idea. Su aplicación podría contribuir de modo importante a la detección e identificación de los ensayos nucleares subterráneos y a la viabilidad de un acuerdo de prohibición de tales ensayos.

En esta esfera, en la que vale la pena dar curso a la más pequeña esperanza, encuentro alentadores en cierto modo, los progresos hechos el pasado año hacia la desnuclearización de América Latina. Los países empeñados en este esfuerzo han abierto nuevos caminos al elaborar el texto de un proyecto de tratado, y si ellos pudieran llegar a un acuerdo sobre un tratado que suprimiera las armas nucleares e impidiera una posible carrera de armamentos nucleares en la totalidad o en parte de su zona del mundo, ello implicaría un avance considerable, tanto hacia la no proliferación de las armas nucleares como hacia el desarme general. Tal tratado podría señalar el camino y tal vez constituir un modelo para la desnuclearización de África y de otras regiones del mundo y, si encontrara el apoyo de las Potencias nucleares, ayudaría también a reducir la magnitud del problema de la proliferación y a dar un muy necesario impulso a otras medidas de desarme.

Aunque las negociaciones de desarme se han centrado principalmente, y con razón, en los armamentos nucleares, la carrera de armamentos de tipo corriente continúa siendo un peligro para la paz y la seguridad del mundo. La adquisición y difusión de armas de tipo corriente sigue llevando todavía, claramente, a crecientes tiranías. Las guerras con armas de tipo corriente pueden causar tremendas pérdidas y sufrimientos; además, existe siempre el peligro de que puedan desembocar en una guerra nuclear por la vía de la escalación. En último análisis, sólo un desarme general y completo puede proporcionar una garantía eficaz de paz y seguridad duraderas. Se han hecho esfuerzos para sentar las bases de la celebración de una conferencia mundial de desarme, como lo solicitara la Asamblea General en su último período de sesiones. Los progresos han sido lentos, pero existe alguna esperanza de que los esfuerzos actuales resulten fructíferos y de que pueda convocarse, antes de mucho tiempo, una conferencia de amplitud mundial.

La búsqueda de formas de detener y controlar la carrera de armamentos y de conseguir, por último, un desarme general y completo, ha sido larga, difícil y desalentadora, y hasta ahora ha dado resultados relativamente escasos. De modo paradójico, el desarme es, al mismo tiempo, una condición que se reconoce como necesaria para la supervivencia, la seguridad y el desarrollo pleno de la humanidad, y una condición que a los líderes de la humanidad parece sumamente difícil satisfacer. A lo largo de sus veintinueve años de existencia las Naciones Unidas — que nacieron y crecieron en la era nuclear — han dedicado mucho tiempo y muchas deliberaciones al desarme. Los resultados son hasta ahora extremadamente pobres; tanto, que resulta lógico preguntarse hasta qué punto comprenden realmente los gobiernos y los pueblos cuáles son los efectos de la carrera de armamentos nucleares. Durante todo este tiempo ninguno de los órganos de las Naciones Unidas ha realizado nunca un estudio general de las consecuencias de la invención de las armas nucleares. Desde que se las utilizó por primera y única vez sobre blancos reales, hace más de veinte años, su poder destructor, las existencias que de ellas hay, su forma de utilización, y la importancia de los recursos humanos y materiales dedicados a su fabricación y posible utilización, han aumentado hasta mucho más allá de lo que pueden comprender la mayoría de las personas y — sospecho — muchos gobiernos. Creo que ha llegado el momento de que un organismo apropiado

de las Naciones Unidas investigue y sopesa las repercusiones e implicaciones de todos los aspectos de las armas nucleares, inclusive los problemas de carácter militar, político, económico y social relacionados con la fabricación, adquisición, despliegue y perfeccionamiento de esas armas y su posible utilización. Conocer la naturaleza exacta del peligro que afrontamos puede ser un primer paso, de enorme importancia, para alejarlo.

### III. Cooperación en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

El ritmo de las conquistas científicas y tecnológicas en la exploración del espacio ultraterrestre sigue siendo tan rápido que es posible hablar ahora con confianza, y no como simple especulación, de aterrizar en la luna y en otros planetas. Aunque los progresos de la cooperación internacional en la esfera de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos han sido mucho menos espectaculares, sin embargo, han continuado durante el pasado año en grado alentador.

Para empezar, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos aprobó unánimemente la recomendación hecha por su Grupo de Trabajo de que se celebre en 1967, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una conferencia internacional que examine, a la luz de las conquistas técnicas y científicas, los beneficios prácticos que han de derivarse de la investigación y la exploración espaciales, y la medida en que los países "no espaciales", especialmente los países en desarrollo, pueden disfrutar de esos beneficios y participar en la cooperación internacional en las actividades espaciales. Este paso indica que la Comisión se percató de que la aventura del hombre en el espacio ultraterrestre debe servir también para mejorar su vida sobre la tierra de forma inmediata y práctica. La misma conciencia de ello se reflejó en las recomendaciones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos en favor del estudio incesante y urgente, por los países interesados y los organismos especializados, de las aplicaciones de la tecnología espacial en las esferas de la meteorología y de las comunicaciones por televisión en gran escala, como medio de resolver problemas tales como el de alimentar a las crecientes poblaciones de muchas partes del mundo, y también en favor de un estudio completo de la necesidad, viabilidad y ejecución de un sistema mundial de satélites para la navegación civil.

En su vigésimo período de sesiones la Asamblea General concedió el patrocinio de las Naciones Unidas a la estación ecuatorial de lanzamiento de cohetes de Thumba (India). Resulta satisfactorio observar que esa estación, la primera de lanzamiento de cohetes sonda que disfruta de tal patrocinio, ha correspondido a esa designación internacional elaborando un programa para crear facilidades y servicios especiales, como cursos prácticos, aulas y alojamientos para científicos, técnicos y aspirantes, que aumenten su importancia como centro internacional de formación. En 1965 se celebró en la estación de Thumba un seminario internacional sobre técnicas y experimentos de cohetes sonda con la ayuda financiera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

No menos satisfactorios son los progresos hechos en las últimas semanas en la formulación de un tratado



internacional que regule las actividades humanas en el espacio ultraterrestre, incluidos la luna y otros cuerpos celestiales. Partiendo de los principios y disposiciones contenidos en dos proyectos de tratados presentados por la Unión Soviética y los Estados Unidos, y también en una serie de enmiendas y propuestas introducidas por otras delegaciones, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos ha llegado ya a un acuerdo sobre los textos de nueve artículos y existen razones para esperar nuevos progresos antes de que termine el año.

#### IV. Operaciones de mantenimiento de la paz

A pesar de las dificultades financieras y políticas, durante el año que se examina las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se continuaron y aún se incrementaron. La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, la Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre y el Organismo de Vigilancia de la Tregua en Palestina (Naciones Unidas) continuaron las funciones que tienen asignadas sobre la misma base que anteriormente. El Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán fue temporalmente reforzado y a consecuencia de haberse reanudado la lucha entre la India y el Pakistán en agosto de 1965 se establecieron dos operaciones suplementarias de carácter puramente temporal, a saber, la Misión de Observación de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y la Misión de las Naciones Unidas sobre retiro de tropas.

La Misión de las Naciones Unidas en la República Dominicana ha continuado informándome, y haciéndolo por mi intermedio al Consejo de Seguridad, acerca de los acontecimientos relacionados con la paz en ese país. A pesar de lo limitado de su mandato, la Misión, que fue establecida en mayo de 1965 con motivo del estallido de la guerra civil, actuó como influencia estabilizadora y como catalizador para ayudar a impedir la escalación de los incidentes y la repetición de la lucha, así como para facilitar la reconciliación. Es alentador que las partes contendientes lograran finalmente un acuerdo que condujo a la celebración de elecciones generales el 1º de junio de 1966 y al establecimiento de un gobierno un mes más tarde. Después de la instalación de dicho gobierno se inició el retiro de la Fuerza Interamericana de Paz, y se confía que ese retiro sea completo en breve.

En vista de estos acontecimientos, estimo que es ahora posible contemplar la terminación en un futuro próximo, de la Misión de las Naciones Unidas en ese país. Cabe mencionar aquí un aspecto singular de esta Misión, a saber, el hecho de que por primera vez en la experiencia de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas una de sus misiones se haya encontrado en yuxtaposición con una operación llevada a cabo por una organización regional. Esto suscitó en materia de relaciones algunos problemas y dificultades especiales que afortunadamente fueron resueltos en forma satisfactoria. A la luz de esta experiencia, estimo conveniente llamar una vez más la atención hacia la cuestión de las relaciones entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, en la esperanza de que los Miembros de las Naciones Unidas sigan estudiando el asunto.

Aunque las Naciones Unidas han continuado activas en el mantenimiento de la paz, es éste un momento crucial, si no crítico, para tales esfuerzos o — en términos más exactos — para el futuro de ellos. Estimo que esto es así no sólo debido a las dificultades financieras que han obstruido algunos de estos esfuerzos en el pasado y que actualmente los obstruyen cada vez más a todos ellos, sino aún más debido al hecho de que la vieja controversia sobre el carácter apropiado y la base "jurídica" de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz se encuentra en un callejón sin salida. En tales circunstancias, sólo puedo reiterar mi confianza en que la Asamblea General en su vigésimo primer período de sesiones dedique su más seria y decidida atención al problema del mantenimiento de la paz, con miras a hallar una solución tanto a sus problemas constitucionales como a los financieros. La actual situación, por cierto, entrafía consecuencias gravísimas para las Naciones Unidas y para su eficacia como instrumento de paz en el mundo. Una simple enumeración de las situaciones de conflicto en que las Naciones Unidas han sido llamadas a intervenir y de las operaciones de mantenimiento de la paz en que se han embarcado en sus veintiún años de existencia pondrá bien en evidencia la importancia de este asunto.

No deseo insinuar y no creo que las Naciones Unidas, por hondas que sean las controversias constitucionales y financieras acerca de las operaciones de mantenimiento de la paz, puedan llegar a encontrarse en la total imposibilidad de responder a una necesidad de que la paz sea mantenida. En cambio, es harto probable que, en las actuales circunstancias, las Naciones Unidas puedan responder a situaciones que requieran esfuerzos de mantenimiento de la paz de un tipo operacional sólo cuando las cuestiones hayan alcanzado el más grave y peligroso estado de crisis.

Es cierto, desde luego, que las Naciones Unidas se han visto en la imposibilidad de hacer frente al reto de la guerra de Viet-Nam, que se vuelve cada vez más peligrosa. Pero esto se debe a abrumadoras y bien conocidas consideraciones de carácter político y no a la propia cuestión del mantenimiento de la paz. Tal como yo lo veo, si se produjera otra grave crisis, como las de los últimos años en Chipre y en la República Dominicana, las Naciones Unidas se verían obligadas a adoptar algún tipo apropiado de medidas de mantenimiento de la paz. Sin embargo, estoy igualmente seguro de que cualquier actuación de esa índole, como la desarrollada en el caso de Chipre, por ejemplo, tendría un carácter *ad hoc* y sería improvisada apresuradamente y sin disposiciones adecuadas de financiación. He criticado frecuente y enérgicamente lo inadecuado de la financiación para la operación de mantenimiento de la paz en Chipre mediante contribuciones voluntarias. Esta crítica se hace no porque las disposiciones confíen al Secretario General, además de sus otras obligaciones respecto de la operación, la difícil tarea de reunir el dinero; el defecto esencial consiste en que esa ha sido una forma sumamente incierta de financiación que ha colocado definitivamente una carga injusta sobre aquellos Miembros de las Naciones Unidas, así como sobre algunos no miembros, que han tenido el suficiente ánimo de cooperación para efectuar las contribuciones necesarias para mantener la actuación de la Fuerza.



En varias ocasiones he subrayado que el mantenimiento de la paz es un medio y no un fin y que, por el carácter mismo del caso, su finalidad última en la búsqueda del restablecimiento y el mantenimiento de la paz es proporcionar aquel momento y aquella atmósfera de calma indispensables para que puedan proseguirse con esperanza los esfuerzos por resolver las cuestiones que originan el conflicto. Por supuesto, esto es sólo parte de todo el asunto, y en modo alguno debe inferirse que detener la lucha y mantenerla paralizada no sea intrínsecamente importante. Es evidente además, que si en el tiempo y la calma proporcionados por el esfuerzo de mantenimiento de la paz no se encuentra, por el motivo que sea, una solución a los problemas de que se trate, la continuación de dicho esfuerzo será mucho menos costosa en cada respecto y para todos los interesados que una reanudación de las hostilidades. Este es, en verdad, el dilema que afrontan actualmente las Naciones Unidas en varias esferas de su actividad.

Las dos restantes operaciones de observación de las Naciones Unidas, la de Palestina y la de Cachemira, vienen existiendo desde 1949. Cuentan con recursos muy limitados en personal y facilidades, y su autoridad para "observar" se limita a hacer investigaciones e informar sobre los incidentes después que han ocurrido, lo cual significa inevitablemente que con frecuencia sólo se puedan obtener testimonios y pruebas inadecuados, cuando no parciales. No obstante, estas operaciones han resultado notablemente eficaces, especialmente para detener la lucha logrando una cesación del fuego sobre el terreno. La moral de los observadores continúa siendo alta, y su propia presencia en las zonas ayuda a mantener la paz. Sin embargo, no siempre pueden impedir o dominar los incidentes y, como en el trágico caso del estallido entre la India y el Pakistán en el pasado otoño, siempre queda el peligro de que se vuelva a las hostilidades abiertas.

Una fuerza de paz, tal como la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas o la Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre, es, por supuesto, más eficaz que un grupo de observadores. Además, es mucho más costosa. En este caso también, las operaciones tienden a tomar un carácter semipermanente: la Fuerza de Emergencia se aproxima actualmente a su décimo año de existencia y la de Chipre ha estado desplegada desde hace dos años y medio.

En casos como los de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, el Organismo de Vigilancia de la Tregua en Palestina (Naciones Unidas), el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y la Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre, el quid del asunto desde el punto de vista de las Naciones Unidas es la ausencia continua de una determinación seria de las partes directamente envueltas en el conflicto en el sentido de buscar una solución razonable. En efecto, a veces parece, y puede ser realmente cierto, que tienden a adoptar la actitud de que la presencia misma de las Naciones Unidas las libera de toda obligación urgente de realizar un esfuerzo verdaderamente decidido en procura de un arreglo de sus diferencias. Bien puede ser cierto que la existencia de la operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la sensación de seguridad que su eficacia inspira reduzcan la sensación de peligro y de urgencia con respecto al conflicto pendiente, lo

cual aligera la presión sobre las partes para que busquen un arreglo.

No parece haber una forma fácil de escapar al dilema que acabo de describir, como no sea la de que las Naciones Unidas perseveren en su esfuerzo de mantenimiento de la paz dondequiera que ello resulte claramente necesario, y que al mismo tiempo intensifiquen sus esfuerzos de pacificación, tratando siempre de encontrar medios nuevos y mejores de persuadir a los Estados para que arreglen pacíficamente sus disputas y ayudarlos a que así lo hagan. Me parece que hay en este sentido mucho que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General podrían hacer. No me cabe duda que existen las posibilidades de que estos órganos adopten, con imaginación y amplitud de miras, iniciativas en la búsqueda de maneras de mejorar y ampliar la capacidad de las Naciones Unidas para arreglar las disputas en lugar de tratar simplemente de detener la lucha y evitar su reanudación una vez que ha estallado. Efectivamente, estimo que se ganaría mucho más si los Miembros de las Naciones Unidas representados en los órganos dedicados al mantenimiento de la paz emprendieran la consideración de posibles nuevos enfoques de la tarea de resolver conflictos. Esto sería mucho más provechoso que aferrarse inflexiblemente a sus actuales posiciones con respecto al mantenimiento de la paz, lo cual sólo puede resultar en la inhibición de la capacidad de la Organización para ocuparse de amenazas o de verdaderas violaciones de la paz en el momento en que dicha capacidad es más necesaria.

Estimo también que los Miembros de las Naciones Unidas podrían individualmente desempeñar un papel importante para ayudar a hallar un arreglo de los problemas políticos que se encuentran en la raíz de los conflictos internacionales. A pesar de todos los esfuerzos de las Naciones Unidas, el éxito de los esfuerzos de pacificación depende, en último análisis, de las partes directamente interesadas en los conflictos. Y aquí los gobiernos que mantienen relaciones amistosas con dichas partes pueden estar en condiciones, en algunos casos tales como el de Chipre, de contribuir en forma individual o colectiva a acercarlos más y a inspirarles la voluntad de efectuar aquellas concesiones necesarias sin las cuales ningún acuerdo es posible. Una actuación como ésa podría complementar provechosamente lo realizado en bien de la paz por los órganos de las Naciones Unidas.

## V. Problemas del desarrollo económico y social

En vista de la importancia del desarrollo económico y social como fundamento de la paz y como esfera de actividades de las Naciones Unidas, no es sorprendente que se haya considerado que uno de los más serios problemas planteados durante el año pasado fue el decaimiento de la ayuda internacional. Lo grave del problema sirvió de estímulo para que se propusieran algunas nuevas ideas sobre la forma de resolverlo. En especial, el personal del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento formuló una interesante propuesta sobre financiación complementaria, conforme a una resolución de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y se presentó al Consejo Económico y Social un penetrante estudio sobre el problema de la financiación del desarrollo en sus diversos aspectos.

Sin embargo, el hecho innegable que emerge de todos los estudios, informes y deliberaciones dedicados al tema en 1966 es que la ayuda internacional se halla estancada, aun cuando haya aumentado la capacidad de los países en desarrollo para proporcionar dicha ayuda, calculada en términos de un aumento de sus ingresos per cápita. Este hecho, y el convencimiento de que en las actuales circunstancias se debían estudiar las posibilidades de ayuda multilateral en materia de alimentos, me llevaron a unir mi voz a las de quienes habían manifestado su preocupación ante la situación de la ayuda internacional. La Asamblea General encontrará en el informe del Consejo Económico y Social una expresión honda de estas preocupaciones.

Otra característica saliente de la situación económica general, que hasta cierto punto es alentadora, es la creciente importancia que se asigna a los medios de orientar y organizar las actividades de desarrollo en forma más eficaz y coherente. Esta tendencia ha llevado a la creación de un Comité de Planificación para el Desarrollo bajo los auspicios del Consejo Económico y Social. Los gobiernos parecen ahora dispuestos a intercambiar sus experiencias tanto en la preparación como en la ejecución de sus planes de desarrollo, y se dirigen a las Naciones Unidas para que éstos los ayuden a establecer un marco dentro del cual puedan proyectar esfuerzos en el plano nacional.

También parece existir un sincero deseo de que el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo llegue a ser un marco dentro del cual puedan fijarse con mayor precisión los objetivos de la comunidad mundial en materia de desarrollo y en el cual puedan calcularse mejor, por no decir anticiparse, las demoras y desequilibrios y sus consecuencias. Todavía habrá que ver si estas actitudes nuevas entrañan la posibilidad de un tratamiento más vigoroso de los problemas del desarrollo durante la segunda mitad del Decenio. Sin embargo, si se ha decidido ya con suficiente energía calcular y hacer frente a las futuras necesidades, los trabajos iniciados sobre proyecciones y planificación pueden contribuir a sentar las bases de una más efectiva cooperación internacional para el desarrollo en el decenio que comenzará en 1970.

Otra tendencia alentadora que se ha notado en 1966 es la mayor atención dada a cuestiones que se presentan en varias esferas. La eficacia de todas las actividades en el campo económico y social depende en gran medida de la manera como se traten estas cuestiones. La transferencia y adaptación de la ciencia y la tecnología por una parte, y el desarrollo de los recursos humanos por otra, son temas que requieren muchas investigaciones, debates e intentos de progresar lo más rápida y ampliamente posible. Los trabajos del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo son de gran utilidad cuando se estudian los medios de que la capacidad inventiva del hombre esté al servicio de las necesidades de los países en desarrollo, a fin de que éstos no queden al margen de sus preocupaciones y puedan aprovechar sus beneficios. Tal vez el hecho de que se comprende cada vez mejor la complejidad y la unidad del proceso del desarrollo hace que una preocupación más amplia por las relaciones que tienen entre sí los aspectos económicos y sociales de las cuestiones de desarrollo esté en vías de sustituir a la distinción, muchas veces criticable, que antes se hacía entre asuntos económicos y asuntos so-

ciales; los métodos utilizados para estudiar el desarrollo regional son un ejemplo de esta tendencia positiva.

Estos factores, junto con el deseo de los países en desarrollo de que se multipliquen las actividades de éste, han dado una nueva orientación a la cooperación de los organismos internacionales dentro del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. La coordinación ha venido a significar algo más que el simple hecho de dividir el trabajo o de evitar la duplicación de esfuerzos, y se ha convertido en un proceso dinámico. Se están llevando a cabo en forma conjunta más actividades que nunca, bajo la inspiración de los dos grupos de expertos mencionados, que suman a su notable competencia un punto central de observación: el Comité de Planificación para el Desarrollo y el Comité Asesor sobre Ciencia y Tecnología. Este último ha preparado un plan mundial de acción y, en medida cada vez mayor, los programas de trabajo en asuntos económicos y sociales se establecen dentro de la perspectiva del Decenio para el Desarrollo, en el sentido de que incluyen una serie de proyectos o actividades que deben llevarse a cabo durante un período de cinco años. Además, el Consejo Económico y Social ha reorganizado sus trabajos a fin de asumir con mayor éxito y eficacia sus crecientes responsabilidades en el centro del intrincado sistema actual de órganos funcionales, comisiones regionales, organismos especializados e institutos de diversas clases.

Como parte de la reorganización de sus trabajos, el Consejo ha hecho progresos hacia el cotejo entre las actividades que podría realizar y el presupuesto de las Naciones Unidas. Sin embargo, una comparación de esta índole está limitada por las normas de presentación del presupuesto. Sería conveniente, y debería ser posible, vincular los programas de costos de tal manera que se pudiesen identificar más claramente las necesidades y limitaciones en cada uno de los principales campos de acción en lo que muy bien cabría llamar las actividades de edificación de la paz de las Naciones Unidas.

La crisis financiera de la Organización no ha impedido que se diversifiquen e intensifiquen en forma notable estas actividades de edificación de la paz. Los gobiernos respondieron en forma alentadora siempre que la suerte de un nuevo programa de gran importancia dependió de contribuciones voluntarias para complementar los recursos del presupuesto. Sin embargo, resulta evidente que, a la larga, con arreglos de esta clase no se puede sustituir a una sana política financiera. Hace algún tiempo me pronuncié en favor de una política de expansión controlada para los asuntos económicos y sociales. Ahora debo advertir que si la estabilización del presupuesto llegase a ser una limitación permanente, gran parte de la inversión de esfuerzos y recursos hecha durante los últimos años podría resultar desperdiciada. También se desvanecerían las esperanzas de que las Naciones Unidas contribuyesen a promover una mejor cooperación internacional en pro del desarrollo, esperanzas que fueron renovadas recientemente por las actividades iniciadas en esferas tales como la planificación para el desarrollo, el desarrollo de recursos, la construcción de viviendas y la demografía, así como por la creación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y por el próximo establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

La inversión que en tiempo, en preparación de políticas comunes y en desarrollo de instituciones representan esas empresas, y la necesidad de contar con nuevos recursos de buena voluntad tanto como de dinero para que la inversión tenga resultados provechosos, están bien ilustradas por la historia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El establecimiento de un mecanismo permanente para la cooperación en materia de comercio y desarrollo dentro de las Naciones Unidas fue la culminación de un largo proceso que tenía por fin la solución de uno de los problemas más importantes y urgentes que afrontan los países en desarrollo. El primer año de experiencia de la Junta de Comercio y Desarrollo en sus trabajos sobre los problemas y cuestiones cuya solución fue considerada en la Conferencia de Ginebra como responsabilidad conjunta de la comunidad internacional ha confirmado, más allá de toda duda, que la voluntad política de los gobiernos de los Estados Miembros es el principal factor que, a la larga, determina la medida en que el mecanismo de la Conferencia puede constituir también un mecanismo eficaz para la adopción de soluciones concretas.

Puesto que existe urgente necesidad de buscar fórmulas adecuadas y de obtener soluciones prácticas para cuestiones relativas a productos básicos, manufacturas, financiación para el desarrollo y comercio invisible, muchos se preocupan ante el hecho de que los diversos órganos de la Conferencia no progresen más rápidamente en la ejecución de las recomendaciones aprobadas en Ginebra. Las intenciones expresadas entonces no se han traducido satisfactoriamente en medidas positivas, a pesar de que la Conferencia no carece de las ideas ni de la capacidad técnica que son necesarias para llegar a decisiones prácticas con la rapidez que exige la importancia del Acta Final.

Durante el año pasado se hicieron en forma constante esfuerzos por superar algunas serias dificultades en materia de productos básicos. Fracasaron dos intentos concretos de aprobar convenios internacionales sobre el cacao y el azúcar, aun cuando se estudiaron nuevos conceptos y fórmulas técnicas sobre el comercio de productos básicos a fin de evitar el tipo de problemas planteados en el pasado al aplicarse dichos arreglos. En el caso del cacao, la falta de un acuerdo fue tanto más desalentadora cuanto que las dificultades que se presentaron no habían sido consideradas insuperables por las partes interesadas. Sin embargo, todas las partes siguen dispuestas a continuar sus deliberaciones después de lo que puede considerarse como un comienzo útil, y abrigo la sincera esperanza de que se llegue a una solución en un futuro próximo.

También es sabido que la Junta y sus órganos técnicos han prestado valiosas contribuciones a la gradual elaboración de una nueva política de desarrollo. Las conclusiones de los grupos de expertos de la Conferencia sobre problemas monetarios, por ejemplo, han señalado a la atención de la comunidad mundial la necesidad de tener en cuenta los intereses de los países en desarrollo antes de aplicar cualquier reforma del sistema internacional que pueda examinarse. Ya se han presentado y discutido varias propuestas concretas en relación con la expansión de las importaciones de productos manufacturados y semimanufacturados provenientes de países en desarrollo, el comercio invisible y el transporte marítimo y la financiación para el desarrollo. Sobre la base de una de las recomendaciones

de la Conferencia, se está estudiando activamente el sistema de financiación complementaria preparado por el Banco Internacional, que ya mencioné y que podría resultar la primera aplicación práctica de las nuevas ideas, que surgieron en Ginebra en 1964. Estas ideas podrán perfeccionarse y convertirse en medidas prácticas si los gobiernos actúan movidos por firmes convicciones sobre los principios que deben inspirar las políticas de comercio internacional y el desarrollo, y teniendo en cuenta los obstáculos que han impedido o retrasado la aplicación de dichos principios.

Observo con agrado que la Conferencia está haciendo los preparativos para su próximo período de sesiones dentro de un espíritu de comprensión mutua y amplitud de criterio. Las Naciones Unidas se podrán sentir satisfechas si el segundo período de sesiones demuestra nuevamente no sólo que es posible la cooperación económica fundada en una auténtica solidaridad entre los Estados Miembros, sino también que dichos Estados están decididos a ponerla en práctica a fin de lograr mejores condiciones de vida para todos los pueblos.

El establecimiento de políticas, instituciones y programas internacionales de desarrollo industrial es otro ejemplo de cómo las Naciones Unidas crean los mecanismos mediante los cuales, en caso de contarse con los nuevos recursos morales y materiales necesarios, podrán desempeñar un papel más importante en el desarrollo económico y social. Durante varios años se ha sentido la necesidad de contar con un instrumento más apropiado a fin de intensificar, concentrar y acelerar los esfuerzos internacionales en pro del desarrollo industrial, y resulta especialmente apropiado que la Asamblea General haya decidido unánimemente establecer una Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial autónoma, en momentos en que se manifieste una creciente preocupación por la desalentadora lentitud de los progresos logrados mediante los esfuerzos en pro del desarrollo de los países que empiezan a industrializarse.

La creación de un organismo central encargado del desarrollo industrial tiene por fin mejorar la gama y la orientación de los esfuerzos en pro del desarrollo que se realizan en el plano internacional. Se reconoce ahora generalmente que, en las regiones menos desarrolladas, una industrialización de bases sólidas es indispensable para el desarrollo equilibrado de todas las actividades económicas, inclusive el uso adecuado del potencial humano, en gran medida inactivo, o por lo menos no utilizado a fondo. Además, la historia de los últimos años ofrece muchas pruebas de que puede acelerarse una industrialización sana, y de las actuales condiciones económicas y sociales en los países en desarrollo se deduce claramente que tal aceleración es necesaria. Si bien en los países industrialmente avanzados la acumulación de capital y la tecnología proporcionan la base para un nivel relativamente alto de progreso sostenido, la industrialización de los países en desarrollo ha sido, en el mejor de los casos, un proceso esporádico. Tan sólo en unos pocos de estos países se considera probable lograr un sector industrial viable dentro de un futuro previsible, sin necesidad de ningún estímulo especial. Los resultados relativamente desalentadores obtenidos por muchos países en las primeras etapas de la industrialización indican que los esfuerzos en tal sentido no han sido lo suficientemente intensos. Parece llegado el momento de afrontar decididamente los problemas del desarrollo industrial, mediante un esfuerzo conjunto de

los países industrializados y de los que están en vías de industrializarse.

La creación de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial debería servir de punto de unión para estos esfuerzos concertados. Naturalmente, las actividades de las Naciones Unidas no pueden ser un sustituto de los esfuerzos nacionales, pero sí pueden desempeñar un papel importante cuando exista la voluntad de cooperar a fin de lograr objetivos comunes. Los países industrialmente adelantados tienen particular responsabilidad en este campo debido a la magnitud de sus recursos de tecnología y capital. Esos países deben demostrar la previsión necesaria para sacrificar sus intereses a corto plazo en favor de beneficios a largo plazo, en provecho del mundo entero, que serán consecuencia de un aumento de la productividad de las dos terceras partes de la humanidad a niveles que ahora son técnicamente alcanzables. Sin embargo, el principal esfuerzo en materia de industrialización corresponderá siempre a los países en desarrollo, que también deben demostrar un alto grado de iniciativa a fin de aprovechar en la mejor forma posible todas las oportunidades existentes.

La importancia de la industrialización también se puso de relieve en la decisión de celebrar el próximo año un Simposio Internacional sobre el Desarrollo Industrial. Esta será la primera reunión mundial sobre problemas del desarrollo industrial. En ella los países en diversas etapas del desarrollo y con sistemas económicos distintos tendrán oportunidad de intercambiar puntos de vista, no sólo sobre los problemas a los que han debido enfrentarse, sino también sobre la estrategia general de la industrialización.

Al señalar estos aspectos más importantes de nuestra tarea en las esferas económica y social, creo que también debo mencionar otras instituciones recientemente establecidas: el Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas y el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.

La creación del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas es una realización importante lograda cuando ha transcurrido la mitad del Decenio para el Desarrollo. El propósito del Instituto es aumentar la eficacia de las Naciones Unidas en la obtención de sus principales objetivos, en particular el mantenimiento de la paz y la seguridad y el fomento del desarrollo económico y social. Su posición autónoma dentro del marco de las Naciones Unidas tiene por fin permitirle llevar a cabo sus labores de formación e investigación sin necesidad de sujetarse a los requerimientos que se hacen a la Secretaría para satisfacer las necesidades inmediatas y ordinarias de la Organización. Al mismo tiempo el Instituto, como un brazo de la Organización, tendrá en cuenta los pedidos del Secretario General, los órganos principales de las Naciones Unidas y los organismos especializados. Se espera que tanto mediante sus actividades de formación como mediante las de investigación, el Instituto haga una contribución directa al proceso de desarrollo en sus aspectos políticos, económicos y sociales; a la consolidación de experiencias logradas por las Naciones Unidas en diversos tipos de empresas; a la formulación de nuevos métodos y técnicas con respecto a las operaciones generales de la Organización; a la preparación de cuadros altamente capacitados, en diversos niveles,

para servicio nacional e internacional vinculado con los propósitos y los trabajos de las Naciones Unidas; y al planteamiento de nuevas formas de abordar el vasto problema de la organización internacional y su posición y su función en el mundo actual y futuro. Creo que el decidido apoyo que el Instituto continúa recibiendo de parte de los Estados Miembros demuestra que estos confían en que los trabajos del Instituto serán de utilidad en las grandes cuestiones de la paz y el bienestar general que tienen ante sí las Naciones Unidas.

La otra organización autónoma — el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social — ya ha iniciado su programa de investigación básica sobre problemas y políticas de desarrollo social y sobre las relaciones entre diversos sectores del desarrollo económico y social en distintas etapas del crecimiento económico. En sus dos primeros años de funcionamiento el Instituto ha hecho una valiosa contribución científica. Ha llevado a cabo la primera investigación amplia sobre el terreno acerca de los métodos para inducir el cambio en el plano local, lo cual no sólo significó una aportación al Informe sobre la Situación Social en el Mundo, 1965, sino que también tuvo por consecuencia el mejoramiento cualitativo de los programas operacionales de los organismos de las Naciones Unidas y de asistencia bilateral. El organismo ha emprendido investigaciones sobre métodos para la planificación social y sobre las interrelaciones de los factores económicos y sociales en el desarrollo que contribuirán en forma directa a los trabajos del Comité sobre planificación para el desarrollo, y que ya utilizan los programas de formación en los institutos de planificación regional de Santiago, Bangkok y Dakar. Su estudio sobre los factores sociales que afectan la productividad agrícola, realizado en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es de gran importancia para muchos Estados Miembros. La creación del Instituto fue posible gracias a la generosidad del Gobierno de los Países Bajos, que garantizó su financiación durante los dos primeros años. Es importante que los trabajos del Instituto, que tienen un carácter original y que no son efectuados por ninguna otra organización internacional y por muy pocas instituciones en el plano nacional, continúen durante un nuevo período de tres años. La Junta del Instituto ha señalado como objetivo la suma de 1.500.000 dólares para la financiación del período 1968-1970. Varios proyectos del actual programa de trabajo de las Naciones Unidas en el campo económico y social requerirán contribuciones científicas del Instituto. El Consejo Económico y Social me ha pedido que busque medios y arbitrios para obtener apoyo adicional para el Instituto tanto de fuentes gubernamentales como privadas. Esta suma podría ser suministrada en un 60% mediante un subsidio que requiere fondos de contraparte, y exhortó a los gobiernos a que hagan promesas de contribución en fecha temprana.

## VI. Cooperación técnica sobre el terreno

En más de cien países y territorios de todo el mundo, en los que centenares de millones de personas sufren a causa de un escaso desarrollo económico, físico e intelectual que no tiene nada de inevitable dada la riqueza potencial de sus propios recursos, la presencia de experimentados asesores, instructores, especialistas



y administradores de uno o más de nuestros programas de asistencia mutua sigue constituyendo un símbolo tangible de la cooperación internacional en pro del desarrollo económico y social y, de hecho, la labor de las Naciones Unidas como un todo.

Son éstos los programas ordinarios de asistencia técnica financiados con cargo a los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos vinculados a ellas. Prestan ellos, dentro de lo limitado de sus recursos financieros, servicios especializados que de otra manera quizá no estarían disponibles; el Programa Mundial de Alimentos, cuyo probado valor le ha ganado una prolongación de vida; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que está a punto de cumplir veinte años y cuya ayuda en materia de sanidad, dietética, servicios sociales, enseñanza y formación profesional es cada vez más necesaria; el programa operacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que cada vez se ocupa más de los problemas de las personas desplazadas e indigentes en África y se dedica cada vez más a ayudarlas mediante su integración económica y social en los países donde se han refugiado; y, sobre todo, las actividades financiadas voluntariamente en materia de asistencia técnica y de preinversión, ahora fusionadas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, creado por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones mediante la fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial, financia actualmente el 80%, aproximadamente, del costo de la asistencia técnica y de preinversión que prestan las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Con promesas anuales por más de 150 millones de dólares, constituye no sólo un importantísimo y altamente diversificado programa de asistencia al desarrollo, sino también el ejemplo más destacado del trabajo en equipo de varios organismos y muchas naciones.

El objetivo esencial de la Asamblea General cuando creó el Programa era dotar al sistema de organizaciones de las Naciones Unidas de los medios para satisfacer con más eficacia, más rapidez y más economía las necesidades prácticas de las naciones en desarrollo. Con el nuevo Consejo de Administración del Programa, que está integrado por treinta y siete naciones y representa a países industrializados y países en desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas posee ya un organismo intergubernamental responsable de la aprobación y de la inspección general de la labor operacional a una escala casi mundial. El Consejo, en sus dos primeros períodos de sesiones de enero y junio de 1966, ha dado prueba de la manera constructiva como se propone desempeñar sus funciones.

El Programa y el Consejo cuentan con los servicios de una secretaría en la que se funden el personal de la Sede y el personal sobre el terreno de los dos organismos constitutivos. El Programa hereda, como es lógico, las responsabilidades ejecutivas indispensables — y los grandes conocimientos y rica experiencia — de las organizaciones participantes; el amplio y laborioso cuerpo de expertos que ya prestaba sus servicios sobre el terreno; los servicios de contratación y colocación esparcidos por el mundo y por cuyo conducto se consiguen continuamente nuevos especialistas y se organizan la concesión de becas y los programas de estudio; y el

sistema de representantes residentes y las personas que ocupan estos puestos, cuyas singulares funciones de representación, orientación y coordinación sobre el terreno figuran entre los elementos más valiosos del Programa. Este también cuenta con el asesoramiento que presta a su Administrador la nueva Junta Consultiva Mixta, integrada por los jefes ejecutivos de todos los organismos que participan en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y por los del Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Por conducto de la Junta y de los contactos diarios entre las secretarías del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de las organizaciones participantes, inclusive el personal sobre el terreno de uno y otros, se produce un valioso intercambio de ideas en ambas direcciones. Esto constituye una promesa de que las perspectivas de programación serán más amplias y de que se intensificará la cooperación entre los organismos y las disciplinas que participan en esta labor, grande y creciente, que representa el Programa.

Estas medidas institucionales han ido acompañadas durante el año pasado por mayores gastos para las actividades sobre el terreno y por la preparación, para su aprobación en 1966, de programas más amplios y mejorados de proyectos en los sectores de preinversión y de asistencia técnica. Se espera que en el sector del Fondo Especial se aprueben para 1966 proyectos adicionales que requerirán del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo asignaciones de créditos por valor de 168 millones de dólares, y se recomienda para el sector de asistencia técnica un programa sobre el terreno por un costo de 110 millones de dólares en el bienio de 1967-1968. Estos nuevos proyectos servirán para que los Gobiernos individualmente y los grupos regionales de Gobiernos sigan recibiendo ayuda para la solución de problemas concretos. Cada vez más, el objetivo de estos programas es ayudar a los países a aumentar su capacidad de desarrollo. Comparto la confianza del Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en que tanto los organismos participantes como los Gobiernos de los países beneficiarios serán capaces de realizar con eficacia estas actividades, de volumen considerablemente superior al pasado.

La consolidación y la intensificación de nuestra labor en esta esfera no debe hacer descuidar el hecho de que aunque las necesidades de asistencia técnica de las naciones en desarrollo han aumentado continuamente durante los últimos años, el volumen total de dicha asistencia, tanto bilateral como multilateral, ha seguido manteniéndose, como ya he señalado antes, a aproximadamente el mismo inadecuado nivel. Para que se puedan realizar progresos satisfactorios en materia de desarrollo, deben asignarse más recursos al desarrollo económico. Las repercusiones de esto van aún más allá; una de las principales tareas de los estadistas debe ser la de conseguir que en las naciones industrializadas se reconozca mejor la gravedad de los peligros que para la seguridad y el bienestar de todas las naciones entraña el lento ritmo actual del crecimiento económico de los países en desarrollo. Aparte de todos los demás problemas y responsabilidades urgentes que tienen los dirigentes de los países industrializados, éstos no pueden, sin peligro, aplazar el enfrentamiento de sus pueblos — moral, intelectual y financieramente — con el hecho de que el futuro del mundo dependerá en gran parte

de la medida en que ellos intenten promover el progreso y vencer el desaliento en las naciones en desarrollo.

Por lo tanto, encarezco a la Asamblea General que atienda en forma aún más positiva a la tarea de reforzar lo que debería constituir un ataque de amplitud mundial contra la pobreza. Cada vez se reconoce más que las actividades de asistencia técnica y de preinversión, que se llevan a cabo dentro del sistema de las Naciones Unidas a un costo modesto, tienen una esencial función catalítica en el proceso del desarrollo. Espero que dentro de este contexto la Asamblea General estudie con la necesaria imaginación el problema de establecer una base más segura para satisfacer las necesidades financieras — presentes y futuras — del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es imprescindible que en 1967 se alcance el objetivo de 200 millones de dólares para el Programa; de hecho, ya parece que incluso esta cifra será demasiado reducida para atender a todas las solicitudes de asistencia dignas de consideración que se prevén. Es necesario — y espero que la Asamblea General lo comprenda — que se establezca una serie de objetivos, cada año más elevados, que hagan ascender los recursos anuales del Programa a un volumen no inferior a los 350 millones de dólares en 1970.

## VII. Creciente preocupación por los derechos humanos

Entre los hechos más alentadores de los últimos tiempos figura, a mi juicio, el interés creciente de que dan muestras los Estados Miembros por el papel que deben desempeñar las Naciones Unidas en la protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El que deban intensificarse los esfuerzos en pro del reconocimiento de la dignidad del hombre corresponde, desde luego, a las obligaciones asumidas en virtud de la Carta; pero ello se ha convertido en una empresa más positiva y práctica gracias a las decisiones adoptadas últimamente por la Asamblea General en materias tales como la discriminación racial y de otros tipos, a los progresos de la labor en materia de pactos de derechos humanos y a la proclamación de 1968 como Año Internacional de los Derechos Humanos. Los amplios informes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, resultado de minuciosos estudios, han llevado al Consejo Económico y Social, con el apoyo de todos sus miembros, a proponer o aprobar nuevos programas de acción que deben emprenderse a un ritmo acelerado.

Las pautas de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos se han ido elaborando durante muchos años en convenciones y declaraciones cuyo sentido histórico es universalmente reconocido, y en muchas resoluciones de diversos órganos. Varios organismos especializados han aportado una importante contribución a este proceso. El alcance de estos derechos, a los que los hombres de todo el mundo se sienten justamente acreedores, se ha ido ampliando progresivamente, y ya han sido quitados de la categoría de los ideales remotos y situados entre las aspiraciones urgentes la libre determinación, la independencia nacional, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la asistencia médica y el derecho a la vida misma.

Una vez que han definido esas pautas, los Estados Miembros sienten un legítimo interés por que ellas se conviertan en realidades de la vida diaria. Si se reforzaran las estructuras institucionales existentes de las Naciones Unidas podrían complementarse de forma constructiva las medidas que se adoptan en el plano nacional.

Las Naciones Unidas, nacidas de la experiencia y los sufrimientos de la segunda guerra mundial, y que presencian con interés y simpatía la obtención de la independencia por tantos pueblos en todas partes del globo, consideran, como es lógico, que la lucha contra la discriminación racial reviste gran urgencia. El Consejo Económico y Social, siguiendo a este respecto a la Comisión de Derechos Humanos, ha rechazado y condenado oficialmente todas las formas de discriminación racial y ha propuesto a la Asamblea General que haga suyo este repudio. Ambos órganos han dejado clara constancia de su oposición a todas las políticas y prácticas de *apartheid* y segregación, y han declarado que están dispuestos a secundar y apoyar la acción de la Asamblea General y, en caso necesario, del Consejo de Seguridad. Comparto plenamente su interés por que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por unanimidad por la Asamblea General en su vigésimo período de sesiones, entre en vigor en un futuro próximo y ejerza todo su efecto mediante la aplicación de los principios que formula y la actuación de las instituciones que establece.

La proclamación de 1968 como Año Internacional de los Derechos Humanos debería servir, como desea la Asamblea General, para intensificar los esfuerzos y las iniciativas de todos los interesados en el campo de los derechos humanos. Una conferencia gubernamental internacional, para la que ya han comenzado los preparativos, y otras muchas actividades que se llevarán a cabo durante el año, constituirán una oportunidad de revisar, en el más amplio sentido del término, lo que hasta la fecha han logrado las Naciones Unidas y los métodos que se han venido aplicando hasta ahora. Por encima de todo, no obstante, el año 1968 debería constituir una ocasión de formular programas de acción para el porvenir de un esfuerzo concertado por elevar los criterios morales de la humanidad hasta el mismo nivel de sus realizaciones técnicas y científicas.

## VIII. La grave situación en Sudáfrica

La más evidente y anacrónica violación en masa de derechos humanos y libertades fundamentales es la que se continúa realizando contra la mayoría "no blanca" del pueblo de la República de Sudáfrica. La situación en ese país no ha mostrado ningún mejoramiento. El Gobierno de Sudáfrica ha seguido aplicando su política de *apartheid* a pesar de los repetidos llamamientos hechos por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General para que abandonase dicha política, por ser ella incompatible con las obligaciones que le fija la Carta y gravemente perturbadora del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Hay una creciente desilusión entre los Estados Miembros a causa de la ineficacia de las medidas que hasta el momento han tomado las Naciones Unidas, y también una demanda cada vez mayor de que se recurra a una acción más vigorosa.

El Consejo de Seguridad no ha examinado la cuestión desde el 18 de junio de 1964. Los Estados africanos pidieron que se convocase una sesión del Consejo en el otoño de 1965, pero luego solicitaron que se aplazase el debate en vista de la grave situación que imperaba en Rhodesia del Sur y de las repercusiones que tendría sobre la cuestión del *apartheid*. La Asamblea General, en su vigésimo período de sesiones, señaló a la atención del Consejo de Seguridad el hecho de que la situación en Sudáfrica constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, que era indispensable adoptar medidas de las previstas en el Capítulo VII de la Carta para resolver el problema del *apartheid*, y que el único medio de lograr una solución pacífica era la aplicación de sanciones económicas de carácter universal.

La Asamblea General también pidió al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial encargado de estudiar la política de *apartheid* del Gobierno de la República de Sudáfrica, adoptara las medidas adecuadas para la mayor difusión de las informaciones relativas a la situación y a los esfuerzos que las Naciones Unidas hacían para resolverla, y pidiera a todos los Estados Miembros, a los organismos especializados y a las organizaciones no gubernamentales que cooperasen a ese efecto con el Secretario General y con el Comité Especial. Asimismo, la Asamblea General dispuso ampliar la composición del Comité Especial solicitando al Presidente de la Asamblea General que designara seis miembros adicionales sobre la base de la responsabilidad principal en el comercio mundial y en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y también de una distribución geográfica equitativa. No fue posible realizar tal ampliación, y el Comité ha seguido actuando con la composición que tenía.

En cumplimiento de la resolución que el Consejo de Seguridad aprobó el 18 de junio de 1964, estableció a principios de este año el programa de enseñanza y capacitación de sudafricanos, como continuación de un limitado programa provisional para el año escolar 1965-1966. Espero sinceramente que dicho programa siga recibiendo el apoyo financiero y de otra índole que requiere para ayudar a preparar un número considerable de sudafricanos a efectos de que desempeñen un papel cabal en el futuro adelanto político, económico y social de su país, y también para demostrar el deseo general de la comunidad internacional de brindar asistencia positiva al pueblo de Sudáfrica.

De conformidad con la decisión que la Asamblea General adoptó en su vigésimo período de sesiones, también he establecido el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica, del cual se han de conceder subvenciones a organizaciones benéficas, a los gobiernos de los países que hayan acogido a refugiados de Sudáfrica, y a otros órganos competentes, a fin de que presten asistencia jurídica, socorran e instruyan a las víctimas de la discriminación y la represión o a los familiares a su cargo. Se ha creado un Comité de Síndicos para que decida sobre el destino que habrá de darse al Fondo y adopte medidas para promover las contribuciones al mismo, así como la cooperación y coordinación de las actividades de las organizaciones benéficas. Hasta el momento, el Fondo ha recibido contribuciones y promesas de contribuciones por más de 100.000 dólares, y abrigo la esperanza de que con nuevas y generosas donaciones pueda cumplir de modo adecuado sus propósitos humanitarios.

Todo esto, sin embargo, deja sin resolver el problema básico. En particular, me parece que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y los principales asociados comerciales de Sudáfrica tienen una responsabilidad especial y también los medios de persuadir al Gobierno de Sudáfrica de que debe abandonar su actitud actual y buscar una solución compatible con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Tales esfuerzos deberían fundarse en el muy amplio consenso que se ha producido en las Naciones Unidas respecto de la necesidad de lograr una solución de la situación gracias a la aplicación plena, pacífica y ordenada de los derechos humanos y las libertades fundamentales a todos los habitantes de Sudáfrica, cualesquiera sean su raza, color o creencia, y mediante consultas entre los representantes de todos los elementos de la población de Sudáfrica. Es indispensable que se avance en esta dirección a efectos de evitar que se agrave aún más la situación en el África meridional y de permitir que Sudáfrica desempeñe un papel constructivo con el destino de África.

## IX. Los problemas de la descolonización

La medida en que la descolonización ha efectuado progresos en los últimos años sólo sirve para destacar lo anómalo de que varios millones de personas todavía se encuentren sujetas a la dominación colonial y, lo que es peor aún, que la mayoría de ellas vivan bajo regímenes que no les ofrecen ninguna esperanza de una pronta y pacífica emancipación. Es menester admitir que si bien las Naciones Unidas han estado a la cabeza del apoyo al principio de la libre determinación, y si bien han hecho mucho para estimular el nacimiento de pueblos independientes, y en ocasiones prestarles asistencia, no han logrado hasta el momento proporcionar o facilitar soluciones eficaces para los diversos problemas coloniales, difíciles y graves, que aún existen.

Este fracaso no se ha debido a falta de preocupación o de esfuerzo por parte de las Naciones Unidas. Durante los debates que se celebraron en la Asamblea General durante su vigésimo período de sesiones quedó en claro que aun cuando se observaba que el balance en tal sentido no resultaba enteramente negativo, la mayoría de las delegaciones se sentían muy gravemente preocupadas por la continua demora en aplicar cabalmente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Por primera vez, la Asamblea General examinó por separado no sólo los problemas coloniales más difíciles, sino también la situación de los muchos Territorios de que se ha ocupado el Comité Especial de Descolonización desde su creación. La Asamblea General, en efecto, aprobó resoluciones concretas acerca de distintos Territorios, indicando de modo especial la dirección y la importancia de las medidas que correspondía aplicar en cada caso en lo tocante al cumplimiento de la Declaración. Entre tanto, otro ex Territorio dependiente, la Guayana Británica, ha obtenido su independencia con el nombre de Guayana. Otros tres Territorios, Bechuania, Basutolandia y Barbada, han de recibir la independencia el 30 de septiembre, el 4 de octubre y el 30 de noviembre de 1966, respectivamente.

Sin embargo, es motivo de pesar y preocupación el hecho de que los principales problemas coloniales



no presenten en la actualidad mejores perspectivas de solución, sobre todo en el caso de Rhodesia del Sur, los Territorios bajo administración portuguesa y el África Sudoccidental.

En el caso de Rhodesia del Sur, se recordará que a raíz de la "declaración unilateral de independencia" que un grupo de rebeldes europeos llevó a cabo el 11 de noviembre de 1965 el Gobierno del Reino Unido declaró que continuaría buscando la forma de poner rápido fin a la rebelión en el Territorio y ayudar al pueblo de Rhodesia del Sur a iniciar nuevamente la marcha hacia el establecimiento del Gobierno de la mayoría y de una sociedad justa, libre de toda discriminación. Ni las medidas adoptadas por dicho Gobierno, ni las sanciones diplomáticas y económicas aplicadas por otros, ni las diversas resoluciones aprobadas por el Comité Especial, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, han conseguido producir una rápida y positiva evolución hacia una solución pacífica del problema, como las Naciones Unidas se habían visto alentadas a esperar. Me arriesgo a sugerir que mientras el Reino Unido siga reclamando para sí la responsabilidad primordial en cuanto a remediar la situación, le será necesario tomar nuevas y más audaces medidas, aunque ponerlas en práctica pueda resultar ahora más difícil que hace algunos meses.

La cuestión de los Territorios bajo administración portuguesa también ha sido objeto de nuevos e importantes debates en el Comité Especial, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Se recordará que el Consejo de Seguridad, en su resolución del 23 de noviembre de 1965, invitó a Portugal a adoptar algunas medidas con miras a que los citados Territorios lograsen la independencia de conformidad con las aspiraciones de sus pueblos. En esa misma resolución, el Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que asegurara la aplicación de las disposiciones correspondientes y que prestara la ayuda que considerara necesaria. Dentro del contexto de la aplicación de la resolución, y según el mandato que me confió el Consejo de Seguridad, he celebrado consultas con el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, y se ha convenido ahora que el Ministro y yo celebremos conversaciones durante el próximo período de sesiones de la Asamblea General.

En lo que hace al África Sudoccidental, la falta de ejecución por parte de Sudáfrica de las resoluciones de la Asamblea General y su negativa a cooperar con las Naciones Unidas siguen constituyendo un motivo de grave preocupación. El Gobierno de Sudáfrica, lejos de poner fin a la aplicación de su política de *apartheid* en el Territorio, ha tomado diversas providencias, según se informa, para llevar adelante la aplicación de esa política, incluso medidas preparatorias para el establecimiento de "territorios patrios no europeos". Además, no se han convertido en realidad las esperanzas de muchos Estados Miembros de que el largamente agudado fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso incoado por los Gobiernos de Etiopía y Liberia abriera el camino para una eficaz acción de las Naciones Unidas acerca de esa cuestión. En su fallo preliminar de diciembre de 1962 la Corte había determinado que tenía jurisdicción para decidir sobre el fondo del conflicto. Más adelante, en su fallo de julio de 1966, decidió que no se podía considerar que Etiopía y Liberia hubiesen establecido ningún derecho o interés legal respecto del asunto que era objeto de sus reclama-

ciones. Tengo plena conciencia de la sorpresa y la desilusión que el fallo de la Corte ha provocado en muchos Estados Miembros. Al mismo tiempo, ese fallo no ha afectado de ninguna manera la condición jurídica del Territorio. La Corte, en efecto, en su opinión consultiva de 1950 afirmó que el mandato continúa en vigor, cosa que confirmó en su fallo de diciembre de 1962. A mi modo de ver, las Naciones Unidas no tienen otro recurso que proseguir su búsqueda de medidas constructivas que ayuden al pueblo del África Sudoccidental a ejercer su derecho a la libre determinación y logren que el Gobierno de Sudáfrica se asocie de buen grado a esta empresa, como debería hacerlo.

La situación en Adén ha sido examinada ampliamente en el Comité Especial y en la Asamblea General. En sus resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) la Asamblea General había recomendado que la Potencia administradora adoptase ciertas medidas a efectos de conducir al Territorio a la independencia en condiciones de paz y estabilidad. El Comité Especial, en su resolución del 15 de junio de 1966, formuló nuevas recomendaciones sobre esta cuestión. En dicha resolución se pedía al Secretario General que, en consulta con el Comité Especial y con la Potencia administradora, designase inmediatamente una misión especial para visitar Adén con el fin de que recomendase las medidas prácticas necesarias para la plena aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y, en especial, determinase el alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión de las elecciones, y le presentase a la mayor brevedad posible un informe para transmitirlo al Comité Especial. A raíz de las consultas que celebré con la Potencia administradora, el Reino Unido me comunicó que, con la salvedad de ciertas reservas, aceptaba las cláusulas dispositivas de las resoluciones 1949 (XVIII) y 2023 (XX) de la Asamblea General y, además, cooperaría con agrado con una misión que yo designara para los propósitos señalados, previo acuerdo respecto de su composición. Espero que como resultado de mis nuevas consultas con el Comité Especial y la Potencia administradora, resulte posible que la Organización desempeñe un papel útil en la labor de capacitar a la población de Adén para que obtenga la independencia en paz y armonía.

El futuro de Basutolandia, Bechuania y Swazilandia y, en particular, el problema de asegurar su integridad territorial y su soberanía, han preocupado a los Miembros de la Organización, tal cual se refleja en las diversas resoluciones del Comité Especial y de la Asamblea General relativas a esta cuestión. En tal sentido la Asamblea General, sobre la base del informe que presenté en su vigésimo período de sesiones, decidió crear un fondo para el desarrollo de la economía de dichos Territorios. La respuesta de los Estados Miembros a mi solicitud de información acerca de la medida en que estarían dispuestos a efectuar contribuciones para ese fondo no ha sido alentadora. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar que una respuesta positiva de los Gobiernos constituiría un aporte constructivo para lograr los objetivos que desean el Comité Especial y la Asamblea General en cuanto al futuro de esos Territorios.

Por lo que toca a los Territorios pequeños dependientes, a los cuales la Asamblea General, en su resolución 2105 (XX), pidió al Comité Especial que prestara suma atención, el Comité Especial y la Asamblea

General han destacado la importancia de recibir información completa sobre su situación política, económica y social, al par que sobre los deseos de la población con respecto a su futuro. En diversas resoluciones, los dos órganos citados pidieron en consecuencia a las Potencias administradoras que concediesen facilidades para que pudieran ir grupos visitantes a dichos Territorios. Cabe esperar que las Potencias administradoras brinden una mayor colaboración en tal sentido al Comité Especial y le permitan así obtener información directa, lo cual le ayudaría grandemente a cumplir su mandato. En este terreno, el Comité Especial ha tomado nota con satisfacción de la reciente invitación que para visitar Guinea Ecuatorial le formuló el Gobierno de España.

En mayo y junio de 1966 el Comité Especial se trasladó a África por tercera vez desde su creación y celebró una serie de sesiones en Dar es Salaam, Mogadiscio, Addis Abeba, El Cairo y Argel, por invitación de los correspondientes Gobiernos. Creo que las reuniones sirvieron para demostrar una vez más el interés y la preocupación de las Naciones Unidas por los pueblos de los Territorios que aún son dependientes.

## X. Observaciones finales

Este examen de los acontecimientos más importantes ocurridos dentro de las Naciones Unidas durante los últimos doce meses presenta los habituales contrastes de luz y sombra. El hecho de que sigan siendo lentos los progresos en muchas de nuestras esferas de actividad y de que hayamos sufrido reveses en otras, tiene que ser inevitablemente causa de decepción para los pueblos del mundo en cuyo nombre se redactó la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, de esto no deben ellos culpar a la Carta ni a las instituciones por ella creadas.

Las debilidades e insuficiencias de las Naciones Unidas no radican en sus propósitos, objetivos y procedimientos constitucionales, sino en la situación mundial de la presente coyuntura histórica. En los debates de la Organización se refleja inevitablemente el estado de las relaciones entre diferentes pueblos y diferentes naciones y, a veces, entre gobernantes y gobernados; las circunstancias económicas en las que viven; las condiciones sociales que les rodean. Ahí, y no en la estructura de las Naciones Unidas, está el origen de los problemas del mundo.

Las dificultades que dimanan de la situación actual son múltiples. Cabe mencionar entre ellas la difundida existencia de estrechos nacionalismos, el recurso periódico al poder desembozado — político, militar o económico — para servir o proteger supuestos intereses nacionales, el espantable aumento, en cantidad y en potencial destructivo, de los armamentos nucleares; los desniveles cada vez más graves en el desarrollo económico, la persistencia de la dominación colonial sobre varios millones de personas, el mantenimiento continuo en muchas partes del mundo de la discriminación racial y el desconocimiento de los derechos humanos, y, entre poblaciones en constante crecimiento, las deficiencias generalizadas en materia de enseñanza, una escasez de alimentos lindera con el hambre, y la falta de cuidados médicos. Esos excesos, iniquidades e injusticias — y los miedos, tensiones, frustraciones, envidias y agresiones

a que dan lugar entre los pueblos y las naciones — siguen condicionando demasiado la situación del mundo, siguen repercutiendo demasiado poderosa y negativamente sobre las políticas nacionales de los Estados Miembros en su relación con la labor de las Naciones Unidas, y siguen estorbando demasiado gravemente, más que poniendo a prueba, la capacidad de la Organización para realizar sus propósitos.

En la difícil situación actual de los asuntos internacionales, considero que el primer deber de los Estados Miembros es enfrentarse con el hecho de que las probabilidades de una cooperación internacional fructuosa en muchos problemas cruciales respecto de los cuales la responsabilidad de las Naciones Unidas, tanto en el plano de la decisión como en el de la acción, es evidente — problemas que van desde el desarme hasta el desarrollo —, se han visto durante los últimos dos años constantes y seriamente disminuidas por una situación sobre la cual, por razones harto conocidas, las Naciones Unidas no han podido ejercer ningún control eficaz. Esta situación, por supuesto, es la crisis cada vez más grave del Viet-Nam, donde en mi opinión, la peligrosa escalación de la fuerza armada ha ido acompañada de una intransigencia y una desconfianza crecientes entre los gobiernos y los pueblos.

Por mi propia parte, he procurado por todos los medios a mi alcance contribuir a los esfuerzos que se han hecho por reducir la escalación del conflicto del Viet-Nam y por llevar a la mesa de conferencias la búsqueda de una solución para el problema. Al hacerlo así me ha angustiado cada vez más el observar que las discusiones al respecto han estado ampliamente dominadas por la consideración y el análisis de las políticas de poder que están en juego, y que se han tenido mucho menos en cuenta los tremendos sufrimientos humanos infligidos por el conflicto al pueblo del Viet-Nam y a los pueblos de otros países que participan en la lucha. A ellos van mis más entrañables sentimientos. En particular, el pueblo del Viet-Nam no ha conocido la paz durante un cuarto de siglo. Su actual aflicción debe ser para todos los interesados la primera preocupación, no la última. Por cierto, sigo convencido de que el problema básico del Viet-Nam no es un problema ideológico, sino un problema de identidad y supervivencia nacionales. Me parece muy peligrosa la idea, tan frecuentemente propugnada fuera del Viet-Nam, de que el conflicto es una especie de guerra santa entre dos poderosas ideologías políticas.

Ha de comprenderse que la supervivencia del pueblo del Viet-Nam es el verdadero problema, que puede resolverse no por la fuerza, sino por la paciencia y la comprensión, en el contexto de una voluntad de vivir y dejar vivir. Si todas las partes pudieran aceptar este enfoque del problema — y a ello puede contribuir la influencia moral de los gobiernos y los pueblos ajenos al conflicto inmediato — creo que sería posible llegar a una solución que pusiera fin al sufrimiento del pueblo del Viet-Nam, satisficiera a la conciencia del mundo en general y suprimiera un formidable obstáculo a la cooperación internacional.

Aunque el Viet-Nam representa la manifestación más grave del insatisfactorio estado de los asuntos internacionales, no constituye el único punto de peligro abierto. La situación en el Oriente Medio no ha mejorado y persisten peligrosas tensiones. Confío sinceramente en que se volverán realidad las recientes esperanzas de solucionar el problema del Yemen. También

espero que la intervención de las Naciones Unidas en la compleja cuestión de Adén pueda contribuir a una solución pacífica. Más allá de estas cuestiones existe el ya largo conflicto entre Israel y los Estados árabes y la constante necesidad de que todos los interesados repriman sus pasiones y observen las condiciones de los acuerdos de armisticio.

No he de ocultar mi inquietud ante algunos de los acontecimientos ocurridos en África durante los últimos doce meses, no sólo los que han endurecido las actitudes coloniales y cuasi-coloniales que todavía persisten en grandes partes del continente, sino también los que han traído consigo súbitos y violentos cambios políticos en Estados recientemente independizados. Esos acontecimientos han creado una impresión de inestabilidad que sería fácil exagerar o presentar bajo falsos aspectos con desventaja para toda África. Al provocar un aumento de la tirantez entre los países de África, han representando un retroceso para la unidad africana. Los pueblos de África no son, ni mucho menos, responsables de todos los muchos problemas con que se enfrentan, pero muy pocos, por no decir ninguno, de éstos, pueden resolverse como no sea por los propios países africanos, mostrando las cualidades de madurez y moderación que con frecuencia han puesto de manifiesto, y usando de esas cualidades para engendrar un mayor espíritu de cooperación y voluntad de trabajo en común, que es esencial para que se cumplan los destinos de África. Esta misión es tan importante que los gobiernos y los pueblos deben poner por encima de todo la voluntad de eliminar sus divergencias en aras del más alto interés de África y del mundo en general.

La situación en América Latina es también causa de cierta preocupación. Pese a los distintos factores que deberían permitir a esta región progresar en su desarrollo económico y social, a América Latina en su conjunto le está siendo muy difícil consolidar tasas de crecimiento satisfactorias. Muchas de las dificultades existentes son de origen local y deben ser eliminadas por los propios países latinoamericanos, en tanto que otras emanan de las relaciones económicas de América Latina con el resto del mundo, por lo cual su solución ha de buscarse en una política eficaz y constante de entendimiento y cooperación internacionales.

Al mismo tiempo, debo poner en claro mi creencia de que a la vez que afrontamos la existencia de situaciones nacionales, e incluso internacionales, que escapan al control de las Naciones Unidas, y reconocemos los efectos perjudiciales que tales situaciones pueden tener sobre los progresos de la cooperación internacional en la esfera de actividad de las Naciones Unidas, hay que poner a la Organización en condiciones de actuar con mayor eficacia y decisión que las demostradas hasta la fecha en muchas de las cuestiones que se le han planteado. No podemos esperar a que el mundo se enderece por sí solo — a que las grandes Potencias, en particular, ajusten sus diferencias — para usar de mayor decisión y, en caso necesario, sacrificar en mayor medida actitudes tradicionales en la solución de urgentes problemas.

Se ha debido, desde luego, en parte a la deterioración de la situación internacional, el que no haya sido posible hacer progresos más importantes en cuestiones tan fundamentales como el desarme. La conferencia mundial del desarme sigue siendo una meta algo distante. El problema de la no proliferación de las armas nucleares ha cobrado carácter de mayor urgencia y es mucho

mayor la necesidad de una pronta acción ante la terrible perspectiva de que ingresen más países en el "club nuclear". En mi opinión, también es necesario y factible llegar a un acuerdo sobre la prohibición de todos los ensayos con armas nucleares. Espero que los debates del próximo período de sesiones de la Asamblea General hagan ver, sobre todo a las propias Potencias nucleares, cuán esencial es hacer rápidos progresos en estas esferas.

Por otra parte, las situaciones internacionales a que he aludido, el aumento de las tensiones y la aparición de nuevos peligros en tantas partes del mundo indican la necesidad de contar con unas Naciones Unidas más fuertes, y no más débiles, en las cuales se pueda confiar para la realización de operaciones de mantenimiento de la paz dondequiera que tal acción permita contribuir a restablecer condiciones de estabilidad. Por desgracia, aunque parece haber cierto acuerdo sobre el hecho de que dichas operaciones han sido eficaces en el pasado y podrían resultar útiles en el futuro, nos encontramos todavía muy lejos de un acuerdo sobre los principios básicos. Espero fervientemente que, en los meses venideros, los Miembros de la Organización en general, y en particular los que tienen obligaciones especiales en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad, puedan considerar posible, en el marco de la Carta, llegar a un acuerdo sobre los procedimientos que deberán seguirse para llevar a cabo tales operaciones, la responsabilidad de los distintos órganos en la dirección real de las mismas y los arreglos financieros que permitan hacer frente a los gastos ocasionados. Debo llamar la atención hacia el hecho de que las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, quizá más que cualquier otra esfera de su labor, han permitido a la Organización ganarse una gran medida de confianza pública que está en peligro de perderse si los Estados Miembros continúan en un atolladero acerca de las cuestiones constitucionales y financieras que se plantean al respecto.

Desearía añadir a este respecto que en mi opinión las organizaciones regionales tendrán una función importante que desempeñar en el futuro en la atenuación de las tirantezas dentro de sus regiones y en la promoción de esfuerzos cooperativos para alcanzar metas comunes. La labor de las Naciones Unidas en el plano regional, por lo que toca a los dominios económico y social, han ganado el aplauso universal. Las comisiones económicas regionales han contribuido cada vez con mayor eficacia a ayudar a los países en desarrollo no meramente con la realización de investigaciones y estudios, sino también mediante actividades operacionales directas, incluidas las que han llevado al establecimiento de institutos de planificación económica y social y de bancos de desarrollo. En cuanto a los organismos regionales intergubernamentales que no pertenecen a las Naciones Unidas, estoy seguro de que su labor puede también coadyuvar a resolver problemas entre los países de una región. No obstante, existen algunas cuestiones de jurisdicción y competencia que se plantean con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, especialmente en la esfera del mantenimiento de la paz, en relación con las cuales la función de las organizaciones regionales requiere una definición más clara. Hace algún tiempo sugerí que un estudio del funcionamiento de las organizaciones regionales, tomando como base sus respectivas cartas, podría resultar útil, y vuelvo a mencionar el asunto en la creencia de que los gobiernos atenderán a esa conveniencia.

Para unas Naciones Unidas fortalecidas es tan importante proseguir su ya prolongada labor de construir la paz como dotarse a sí mismas de los medios precisos para ayudar a los países a mantener esa paz. No basta, en mi opinión, que las Naciones Unidas se ocupen, donde pueden y cuando el caso se plantea, de cada uno de los problemas concretos que amenazan a la paz mundial. Es preciso atacar las causas de tirantez en el mundo en todas sus muchas raíces. Tenemos los medios para hacerlo y hemos empezado ya. Si bien las actividades internacionales en la esfera del desarrollo económico y social y de los derechos humanos, por ejemplo, no figuran en los grandes titulares de prensa, el hecho es que la mayor parte de los recursos de las Naciones Unidas y de su sistema institucional se destina a esas actividades. El modo en que éstas se llevan a la práctica está directamente relacionado con la reducción de las tensiones. He dicho repetidas veces cuán esencial es que disminuya la distancia entre los países ricos y los pobres. Considero de máxima importancia que los gobiernos de los Estados Miembros adopten seriamente los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y hagan decididos progresos hacia su logro.

Hay otras causas de tirantez que no pueden desatenderse hasta que se resuelvan solas. En particular, estimo que las Naciones Unidas deben abordar con firmeza los problemas que podríamos denominar, a causa de su origen o de su naturaleza, como problemas de colonialismo. Si bien reconocemos que se han hecho progresos importantes, no nos es posible olvidar que el proceso de descolonización no ha terminado. Sigue existiendo un núcleo de colonialismo real, sobre todo en África. Va unido al problema afín de la discriminación racial y este mal, a su vez, hace que la mayoría de la población de uno de los más grandes Estados independientes de África esté sujeta a condiciones análogas a las del peor tipo de dominio colonial. Creo que estas situaciones ofrecen a las Potencias coloniales una gran ocasión de demostrar su capacidad política, ocasión que deben aprovechar antes de que sea demasiado tarde.

Además, es imposible considerar algunos de estos grandes problemas — sea la posición de las Naciones Unidas respecto de la crisis del Asia Sudoriental o la falta de progresos en el desarme — sin relacionarlos con el hecho de que las Naciones Unidas no han conseguido todavía el objetivo de la universalidad de su composición. A la larga, no se puede esperar que la Organización funcione con total eficacia si no se permite que una cuarta parte de la raza humana participe en sus deliberaciones. Sé que corregir esta situación entraña graves dificultades políticas; pero espero que las ventajas mediatas puedan verse claramente y que sea posible hacer los ajustes necesarios.

Este proceso exigirá tal vez algún tiempo más. Mientras tanto, estimo que se ha de dar a todos los países el estímulo y la posibilidad para seguir más de cerca los trabajos de la Organización, si así lo desean. Sólo beneficios, tanto para ellos como para las Naciones Unidas en conjunto, podrían obtenerse si se les permitiese mantener observadores en la Sede, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y en las comisiones económicas regionales, y si se les pusiese en contacto con los trabajos de la Organización y con las corrientes

y contracorrientes de opinión que prevalecen en su interior, dándoles asimismo ocasión de contribuir a ese intercambio. Esos contactos y comunicaciones llevarían sin duda a una mejor comprensión de los problemas del mundo y a que se abordara con criterios más realistas su solución. En esta cuestión me he sentido obligado a seguir la tradición establecida, por la cual sólo algunos Gobiernos han podido mantener observadores. Recomendando que esta cuestión sea objeto de más estudio por la Asamblea General, con el fin de que se dé al Secretario General una orientación más clara acerca de la política que haya de seguirse en adelante a la luz, me atrevo a esperar, de estas observaciones.

Las Naciones Unidas son un experimento de diplomacia internacional multilateral. Los gobiernos mantienen aquí representantes permanentes que han de seguir instrucciones destinadas, como es comprensible, a favorecer los intereses políticos o de otra índole de esos mismos gobiernos. Al mismo tiempo, sin embargo, éstos han suscrito los principios e ideales de la Carta y han reconocido que uno de sus propósitos básicos es "servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones" a fin de alcanzar los propósitos comunes para los que fueron creadas las Naciones Unidas. Veo con satisfacción que en la mayor parte de los casos los representantes de los Estados Miembros, al proteger sus intereses nacionales, no olvidan sin embargo los intereses más amplios de la humanidad que esta Organización representa. Personalmente creo que debería ser posible que los gobiernos de los Estados Miembros utilizaran en todos los casos a las Naciones Unidas como centro para armonizar sus esfuerzos a fin de que los intereses de la humanidad, en vez de verse menoscabados, sean adecuadamente servidos.

En estas observaciones he puesto de relieve algunas de las creencias fundamentales en que me he inspirado para el desempeño de mis funciones como Secretario General en los cincuenta y ocho meses pasados. En esta ocasión considero apropiado encarecer la necesidad de prestar una atenta consideración a los problemas a que me he referido y a las sugerencias que he hecho, si se desea fortalecer a la Organización, preservar y promover la paz, y hacer auténticos progresos en la consecución del objetivo del adelanto económico y social de todos los pueblos. Hay muchos modos de alcanzar estos objetivos de paz y bienestar y no creo que nadie deba aplicar criterios dogmáticos para ello. Las condiciones varían ampliamente de un país a otro y cada uno de ellos tiene el derecho, dentro de la amplia estructura de los principios de las Naciones Unidas, de perseguir sus fines a su propio modo y por aquellos medios que estime más adecuados y fecundos. Al mismo tiempo, creo que las diferencias ideológicas que han dividido al mundo empiezan a dar muestras de ir perdiendo filo, y me acerco al final de mi mandato con cierta confianza de que al cabo de años las Naciones Unidas demostrarán que son el medio por el que la humanidad ha de poder no sólo sobrevivir, sino realizar también una gran síntesis humana.



15 de septiembre de 1966.

U THANT  
Secretario General